



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARENTA Y CINCO CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**

j45cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Rad: 11001310304520210019400
Accionante: JUAN CARLOS CIFUENTES MARÍN
Accionadas: DEFENSORÍA DEL PUEBLO –DEFENSORÍA PÚBLICA-

Procede el despacho a resolver la acción de tutela de la referencia, previo el estudio de los siguientes,

I. ANTECEDENTES

Como soporte fáctico de su solicitud, en síntesis, indica el apoderado judicial del señor Juan Carlos Cifuentes Marín, que el 18 de diciembre de 2020, elevó ante la entidad accionada, derecho de petición solicitando copia del manual dispuesto por la Defensoría del Pueblo que indica el procedimiento que debe seguir los Defensores en el ejercicio de su oficio y que permitan garantizar el derecho de defensa de aquellas personas que solicitan los servicios de la Defensoría; se le indique el número de folios que contiene la carpeta que reposa en la Defensoría con relación a su caso y las actuaciones dispuestas por la entidad para asumir su defensa; se indique y relacione los documentos que contiene la carpeta de la Defensoría en relación con su caso y se allegue copia certificada de la carpeta soporte de la defensa y actuaciones realizadas por la Defensoría Pública en su proceso y, hasta la fecha de presentación de la acción, no ha obtenido respuesta alguna.

Por consiguiente, solicita se le amparen su derecho fundamental de petición, ordenándole a la entidad accionada otorgue respuesta satisfactoria frente a la petición que radicó el 18 de diciembre de 2020.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

1. Asumido el conocimiento de la acción por parte de esta Oficina Judicial se envió comunicación a la entidad accionada, para que ejerciera el derecho de defensa y se pronunciará sobre los hechos base de esta acción y envíe a este estrado judicial copia de los documentos que guarden relación con la petición, acompañado de un informe detallado sobre los hechos de la presente acción.

2. En tiempo, la accionada solicitó se declare por improcedente por la superación actual de las circunstancias que motivaron la acción, ya que la entidad a través de la Dirección Nacional de Defensoría Pública y la Regional Bogotá atendieron de fondo la solicitud que originó la presente acción constitucional. Además, informó que, por error humano, en principio, solo se atendió parcialmente la solicitud, pero la situación se corrigió y se tomaron los correctivos, ya que el encargado en lugar de remitir al área respectiva luego de responder lo de su competencia, procedió al archivo, por lo que se ha configurado un hecho superado.

III. CONSIDERACIONES

1. Acorde con la Constitución Política, el Estado Colombiano está instituido bajo un sistema social de derecho, lo cual implica que la organización del mismo debe estar sujeta a una serie de principios y reglas procesales que se encargan de crear y perfeccionar todo el ordenamiento jurídico; de esa manera, se limita y se controla el poder estatal con el fin de que los derechos del individuo se protejan y se realicen a partir de lo dispuesto en la propia Ley.

1.1. De esa forma, se establecen pues los principios y derechos constitucionales que irradian a todo el ordenamiento jurídico su espíritu garantista, que busca como fines últimos la protección y realización del individuo en el marco del Estado al que se encuentra asociado. Precisamente, uno de los mecanismos destinados a buscar la materialización de los principios que componen el Estado Social de Derecho, es la acción de tutela consagrada por el artículo 86 de la Carta Magna como el instrumento idóneo para que toda persona logre la garantía y protección de sus derechos fundamentales cuando estos hayan sido vulnerados o sean amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular.

1.2. La finalidad última de este procedimiento especial es lograr que el Estado, a través de un pronunciamiento judicial, restablezca el derecho fundamental conculcado o impida que la amenaza que sobre él se cierne se llegue a configurar.

1.3. Como la acción objeto de pronunciamiento puede ser formulada por cualquier persona que considere vulnerados sus derechos fundamentales, como precisamente aquí ocurre con el señor Juan Carlos Cifuentes Marín quien instauró la acción por conducto de apoderado judicial y por ser quien presentó la petición ante la accionada, resulta acreditada la legitimación en la causa por activa.

1.4. Por su parte, la accionada se encuentra legitimada en la causa por pasiva por cuanto la misma es viable dirigirse contra toda autoridad pública y extraordinariamente contra particulares, siempre que presten un servicio público como lo son quienes administran entidades de seguridad social y más aún, como en el caso concreto, cuando el DEFENSORÍA DEL PUEBLO – DEFENSORÍA PÚBLICA- representa a la Nación.

1.5. La eficacia de la acción de tutela como medio de amparo superior halla su origen en la aplicación del principio de la inmediatez, presupuesto de procedencia, dado que el objetivo primordial de tal instrumento se encuentra en la protección actual, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales. Bajo ese escenario, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, siendo el elemento de la inmediatez ineludible obligación, la acción de tutela y su ejercicio deba ser oportuno y razonable, presupuesto que aquí se cumple dado que la petición erigida por el actor consistente en que se le expida copia del manual dispuesto por la Defensoría del Pueblo que indica el procedimiento que debe seguir los Defensores en el ejercicio de su oficio y que permitan garantizar el derecho de defensa de aquellas personas que solicitan los servicios de la Defensoría; se le indique el número de folios que contiene la carpeta que reposa en la Defensoría con relación a su caso y las actuaciones dispuestas por la entidad para asumir su defensa; se indique y relacione los documentos que contiene la carpeta de la Defensoría en relación con su caso y se allegue copia certificada de la carpeta soporte de la defensa y actuaciones realizadas por la Defensoría Pública en su proceso, la cual presentó el 18 de diciembre de 2020.

1.6. De otra parte, ha de resaltarse el carácter residual y subsidiario de esta acción, dado que el aparato judicial prevé diversos mecanismos de defensa ordinarios a los que pueden acudir las personas para la protección de sus derechos; en este sentido, el juez de tutela debe observar cada caso

concreto y determinar la existencia o no de otro medio judicial que sea idóneo para proteger el derecho amenazado.

En el asunto objeto de análisis, el demandante acude a la acción constitucional para reclamar, conforme lo suplicó en las peticiones, que se le protejan el derecho fundamental de petición, y se le ordene a la accionada Defensoría del Pueblo –Defensoría Pública- proceda a pronunciarse de fondo sobre la petición de que se le expida copia de un reglamento interno de esa entidad para el manejo de los asuntos que adelanta cuando se le solicitan los servicios y dé información de la carpeta que contiene el proceso del accionante, pedimento frente al cual el ordenamiento jurídico no cuenta con un procedimiento eficaz e idóneo, de donde resulta forzoso concluir que para el caso se cumple con el presupuesto de la subsidiariedad.

2. Conforme a lo expuesto queda claro que el accionante solicita el amparo de su derecho fundamental de petición el cual considera vulnerado con el proceder de la accionada ya que no se ha pronunciado de fondo en cuanto a lo por él reclamado respecto a que se le expida copia del manual dispuesto por la Defensoría del Pueblo que indica el procedimiento que debe seguir los Defensores en el ejercicio de su oficio y que permitan garantizar el derecho de defensa de aquellas personas que solicitan los servicios de la Defensoría; se le indique el número de folios que contiene la carpeta que reposa en la Defensoría con relación a su caso y las actuaciones dispuestas por la entidad para asumir su defensa; se indique y relacione los documentos que contiene la carpeta de la Defensoría en relación con su caso y se allegue copia certificada de la carpeta soporte de la defensa y actuaciones realizadas por la Defensoría Pública en su proceso, situación que se encuentra latente por definir y de ahí que estime la vulneración de ese derecho.

2.1 El derecho fundamental de petición, concebido en el artículo 23 de la Constitución Política, dispone que “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”.

2.2. A su turno, la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN Y SE SUSTITUYE UN TÍTULO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, en su artículo 14, señaló que “[s]alvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción (...)”. Sin embargo, en el párrafo de la mentada regla se establece una excepción, la cual consiste en que, si eventualmente no es posible dar respuesta a la petición en dicho lapso, se informará tal circunstancia al interesado con exposición de los motivos y el plazo en que será resuelta, el cual no podrá ser mayor al doble del tiempo establecido inicialmente, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes especiales.

2.3. En sentencia T-293 de 2015 la Corte Constitucional determinó “(...) que este derecho comporta las siguientes obligaciones correlativas para la autoridad que recibe la solicitud: (i) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (ii) la respuesta debe producirse dentro del plazo legalmente establecido y en caso de vacío normativo, dentro de un plazo razonable, que debe ser lo más corto posible;¹ (iii) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado; (iv) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder;² y (v) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.³”.

1. Descendiendo al caso sub-examine, se tiene que el accionante manifestó en el escrito de tutela que el día 18 de diciembre de 2020 solicitó ante la

¹ Sentencia T-481 de 1992; M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.

² Sentencia T-219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz.

³ Sentencia T-249 de 2001; M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

autoridad accionada, se le copia del manual dispuesto por la Defensoría del Pueblo que indica el procedimiento que debe seguir los Defensores en el ejercicio de su oficio y que permitan garantizar el derecho de defensa de aquellas personas que solicitan los servicios de la Defensoría; se le indique el número de folios que contiene la carpeta que reposa en la Defensoría con relación a su caso y las actuaciones dispuestas por la entidad para asumir su defensa; se indique y relacione los documentos que contiene la carpeta de la Defensoría en relación con su caso y se allegue copia certificada de la carpeta soporte de la defensa y actuaciones realizadas por la Defensoría Pública en su proceso, frente a lo cual la Defensoría del Pueblo –Defensoría Pública- que los *Defensores Públicos en la Defensa Penal actuamos basados en la ley 906 de 2004, esto es, este proceso tiene unas etapas, estas se le explicaron en su momento, más exactamente en la diligencia de acusación, etapa en la que asumí su defensa, la garantía que usted pide se certifique, no se encuentra en un manual de defensores, se encuentra en los estudios que cursa un abogado y que se acredita con la Tarjeta Profesional que expide el Consejo Superior de la Judicatura... Es extraño para esta defensora que, Usted, solicite información sobre el expediente con relación a su caso, ya que, éste en varias oportunidades fue remitido a su familiar Señor Alirio Cifuentes y al Defensor de Confianza que asumió el caso en etapa de juicio y quien extrañamente, manifestó no conocer el expediente, del cual obra evidencia en mensajes vía whatsapp y mail, sin embargo, con la presente contestación se remite de nuevo el expediente completo y se le informa a usted y su apoderado, como desde el principio se les informo que, el mismo, no reposa en una carpeta física si no virtual, por disposición del Gobierno Nacional por temas de pandemia y quien posee la información es el despacho judicial de conocimiento, Juzgado 44 Penal Circuito Función Conocimiento..”, por lo que solicita se niegue el amparo constitucional deprecado al configurarse un hecho superado.*

3.1. Contrastadas la petición y la respuesta, para el juzgado fluye que, en verdad, esta última atiende todas las inquietudes planteadas por el accionante en su petición y resulta clara y congruente con lo solicitado, de tal suerte que colma todas las garantías que comprende la prerrogativa de petición que contempla el artículo 23 Constitucional, pues claramente se le notificó la respuesta a la dirección por él registrada donde se le informó que no hay como tal un manual de funciones ni una carpeta interna sino que su proceder se encuentra supeditado a la ley, le remitió las copias del expediente que posee y le puso de presente que las actuaciones reposan en el proceso que conoce la autoridad judicial donde puede pedir las copias que requiera.

3.2. Así las cosas, concuerda el despacho con la argumentación dada por la accionada ya que con su proceder, se logra establecer que en el presente asunto se configuró el hecho superado, sobre el cual la jurisprudencia constitucional ha sostenido:

“(…) cuando durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestren que la vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha dejado de ocurrir.⁴ En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha enumerado algunos requisitos que se deben examinar en cada caso concreto, con el fin de confirmar si efectivamente se está frente a la existencia de un hecho superado, a saber: 1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa. **2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.** 3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado.”⁵ (Subrayado y Negrilla fuera del texto original).

4 Al respecto se pueden consultar las sentencias T-307 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-488 de 2005 M.P. Álvaro Tafur Gálvis, T-630 de 2005 Manuel José Cepeda, entre muchas otras.

5 Sentencia T-045 de 2008.

A su turno, en Sentencia de Unificación 540 de 2007 dicha Corporación expresó que, “[e]n efecto, si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”.

Así las cosas, al estructurarse el hecho superado en el presente trámite, conlleva a que el amparo constitucional sea negado y así se dispondrá en la resolutive del presente fallo.

En virtud de los argumentos expuestos, el **JUZGADO CUARENTA Y CINCO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

V. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela instaurada por JUAN CARLOS CIFUENES MARÍN contra el DEFENSORÍA DEL PUEBLO –DEFENSORÍA PÚBLICA, por hecho superado.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión por el medio más expedito a las partes. Déjese la constancia de rigor.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en el evento de no ser impugnada. Déjense las constancias pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


MONICA TATIANA FONSECA ARDILA
Jueza